

Tunja, julio de dos mil veinticinco.

Señores

Tribunal Superior de Boyacá (Reparto)

E. S. D.

**Referencia:** ACCIÓN DE TUTELA

**Accionante:** Iván Darío Valbuena Arango

**Accionado:** Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y  
Casanare

**IVÁN DARÍO VALBUENA ARANGO**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi respectiva firma, obrando en nombre propio, por medio del presente documento acudo ante su despacho, con el fin de instaurar **ACCIÓN DE TUTELA** en contra de la entidad pública Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, para que me sea protegido mi derecho Constitucional fundamental de petición, al no renovar la relación contractual de prestación de servicios que venía eje vulnerado por la entidad accionada al no dar contestación a la solicitud presentada el día 20 de junio de 2025. La petición que hago ante su despacho, la realizo con fundamento en los siguientes:

## **I. HECHOS.**

**PRIMERO.** El día 20 de junio presenté derecho de petición ante el Consejo Seccional de la Judicatura, con el objeto de que se me concediera la homologación de cargo al cual me inscribí dentro del concurso de méritos CONVOCATORIA NO.4 DE EMPLEADOS DE TRIBUNALES, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS, el cual corresponde a Profesional universitario de Tribunal, centro u oficina de servicios – grado 16. Lo anterior, dado que, a la fecha y luego de casi perder vigencia la lista de elegibles aún no ha resultado con posiciones vacantes dentro de las vacantes publicadas en la página de la rama.

**SEGUNDO.** Luego de transcurridos más de 15 días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no ha dado respuesta a la misma, vulnerando con ello mi derecho fundamental de petición.

**TERCERO.** La respuesta de fondo a la solicitud planteada resulta de mayor importancia, toda vez que el transcurrir del tiempo podría hacer nugatorio mi derecho a acceder a cargos públicos derivados de la realización del concurso mencionado.

## **II. PRETENSIONES.**

**PRIMERA.** Sírvanse honorables magistrados, ordenar se dé una respuesta de fondo; de manera precisa, clara, suficiente y urgente a la solicitud presentada el día 20 de junio de 2025, con radicado interno **EXTCSJBOY25-5650**, para

efectos de proteger mi derecho fundamental vulnerado y evitar un perjuicio irremediable.

### III. DERECHO

Invoco como fundamento de derecho los artículos 23, 85 y 86 de la Constitución Política y demás normas concordantes.

### IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La Constitución Política de Colombia consagra de manera expresa en su artículo 23, el derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades –también ante los mismos particulares, según la Ley- y al mismo tiempo dispuso su aplicación inmediata en el artículo 85, como una herramienta no solo de actuación de los particulares ante las autoridades del Estado, sino como un elemento de realización de otros derechos fundamentales de estirpe Constitucional, en tanto gran parte de la esfera personal del individuo depende, en alguna medida, de las actuaciones de aquel, máxime en un Estado como el nuestro cuya vocación social es indiscutible como puede deducirse entre otros, del Artículo 1 Constitucional.

Además, importante es dejar claro de una vez, que el alcance dado por la Constitución al derecho en mención no se reduce en la simple posibilidad de presentar una petición respetuosa, sino que implica, de suyo, el derecho a obtener una pronta respuesta; corolario necesario dentro de la lógica de la figura de la petición, por cuanto de nada serviría realizar solicitud alguna si no hay garantía que asegure la obtención de una respuesta. Y no precisamente una respuesta dada a la ligera, de cualquier modo, sino una respuesta poseedora de ciertas características referidas a oportunidad, claridad y precisión, si que también debe resolver el fondo del asunto requerido y ser puesta en conocimiento del peticionario, so pena de que toda actuación que conduzca a la no satisfacción de tales requisitos emerja como vulneradora del derecho fundamental traído a colación en este escrito. Según la jurisprudencia Constitucional sobre la materia:

*“El derecho de petición, es una garantía constitucional que le permite a los ciudadanos formular solicitudes respetuosas... y obtener consecuentemente una respuesta pronta, oportuna y completa sobre el particular, la cual debe necesariamente "ser llevada al conocimiento del solicitante", para que se garantice eficazmente este derecho. Desde este punto de vista, el derecho de petición involucra "no solo la posibilidad de acudir ante la administración, sino que supone, además, un resultado de ésta, que se manifiesta en la obtención de una pronta resolución. Sin este último elemento, el derecho de petición no se realiza, pues es esencial al mismo". (Sentencia T-301 de 1998, M.p. Alejandro Martínez Caballero).*

Y en otra oportunidad, aludiendo a las características del mismo indicó:

*“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales...*

*b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.*

*c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición...” (Sentencia T-377 de 2000, M.p. Alejandro Martínez Caballero).*

Ahora bien, según la infraestructura jurídica diseñada desde la misma constitución política, la protección que el ordenamiento constitucional establece a efectos de proteger el derecho de petición; el instrumento por excelencia para proteger derechos de tinte fundamental, es la acción de tutela consagrada por el artículo 86 de la carta como la vía más expedita y la herramienta más eficaz para lograr la vigencia y realización inmediata de aquellos derechos reconocidos como fundamentales e inherentes al ser humano por ser parte, elemento y estructura integrante de su dignidad, esencia de su condición. Al respecto se ha pronunciado La Corte Constitucional en innumerables ocasiones, en donde ha ratificado la posibilidad inobjetable de protegerlo mediante la acción Constitucional de tutela, consagrada en el artículo 86 superior, en los siguientes términos:

*“El derecho de petición, reconocido a toda persona como un instrumento idóneo para acudir ante la autoridad en la certeza de obtener pronta resolución sobre solicitudes respetuosas formuladas en interés general o particular, es garantía de clara estirpe democrática que permite al pueblo, como titular de la soberanía, tener acceso directo a quienes administran los asuntos públicos. A éstos corresponde, por mandato perentorio de la Carta, el deber correlativo de considerar las peticiones y de resolverlas oportuna y claramente.*

*Es, además, un derecho constitucional fundamental, no tanto por encontrarse ubicado dentro del Título II, Capítulo I, de la Carta Política - criterio formalista que esta Corporación ha desechado varias veces para sustituirlo por el sustancial que mira al contenido concreto del derecho-, sino por estar íntimamente ligado a la esencia de las relaciones entre la persona y el Estado en cuanto hace posible el acceso del gobernado a quien ejerce el poder y su control sobre la actividad pública”. (Sentencia T-242 de 1993, M.p. José Gregorio Hernández).*

Y en otra oportunidad:

*“Cuando el derecho de petición es violado, cabe la acción de tutela, no para obtener que la autoridad administrativa profiera una decisión favorable a las pretensiones del accionante... sino para alcanzar en el caso concreto la pronta resolución y la comunicación de lo resuelto al peticionario. El derecho fundamental de éste queda satisfecho con la resolución de la administración, adoptada y comunicada oportunamente, sobre el asunto planteado por el peticionario, bien que se acoja, ya que se deseche el fondo de su solicitud”. (Sentencia T-273 de 1995, M.p. José Gregorio Hernández).*

Por otra parte, ya hicimos referencia a que uno de los requisitos que debe cumplir la respuesta a la cual se encuentra obligado el solicitado es precisamente la prontitud. En este sentido, la respuesta a la cual se encuentran obligados los organismos destinatarios del derecho de petición, ha de darse dentro de un plazo razonable, que se encuentra definido en la Ley. La misma Corte Constitucional ha manifestado en diferentes fallos de manera general:

*“La resolución, producida y comunicada dentro de los términos que la ley señala, representa la satisfacción del derecho de petición, de tal manera que si la autoridad ha dejado transcurrir los términos contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso concluir que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta de respuesta, quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato constitucional”.* (Sentencia T-242 de 1993, M.p. José Gregorio Hernández).

Ahora bien, en frente del caso concreto merced al cual acudo ante usted, señor juez, el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACA Y CASANARE, entidad a quien solicité se autorizara la homologación del cargo al cual aspiré dentro del concurso atrás referido, no ha otorgado ninguna respuesta. En otras palabras, la mora en la respuesta a mi solicitud, por parte de la entidad, no se justifica de ninguna manera y por el contrario es una muestra clara de vulneración al derecho fundamental a solicitar peticiones respetuosas y obtener pronta respuesta; más aún, teniendo en cuenta su total silencio.

Por las anteriores razones acudo ante usted señor juez, para que otorgue tutela a mi derecho fundamental mencionado, ante la ausencia de soluciones jurídicas diferentes para brindar una salida apropiada a este problema jurídico y evitar así un perjuicio irremediable.

#### **IV. PRUEBAS**

Solicito señor juez, se tengan como pruebas las siguientes:

##### **1. Documentales:**

- Copia simple de mi cédula de ciudadanía.
- Copia simple solicitud presentada.
- Capturas de correos electrónicos a través del cual se radicó la solicitud.

#### **V. ANEXOS.**

Acompaño a la presente acción, copias de la misma y los documentos aducidos como pruebas.

#### **VI. NOTIFICACIONES**

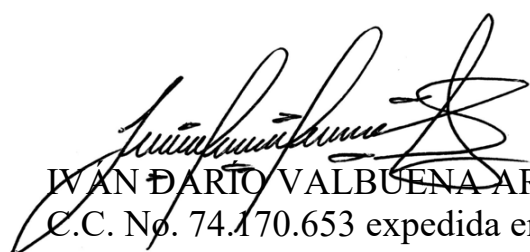
Recibiré notificaciones personales a través de mi correo electrónico personal: [ivalarang@gmail.com](mailto:ivalarang@gmail.com) o en los teléfonos 317 6705626 – 310 7857881.

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOYACA Y CASANARE, correo electrónico: [scrconsecjudboycas@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:scrconsecjudboycas@cendoj.ramajudicial.gov.co); dirección física Calle 19 # 8-11 Tunja, Boyacá Colombia.

## VII. JURAMENTO

Manifiesto a Usted señor juez, a nombre de mi poderdante, que no ha sido interpuesta ninguna otra acción en relación con los mismos hechos y derechos expuestos ante otra autoridad.

Del señor Juez, Atentamente,



IVAN DARIO VALBUENA ARANGO  
C.C. No. 74.170.653 expedida en Soatá - Boyacá



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **74.170.653**

**VALBUENA ARANGO**

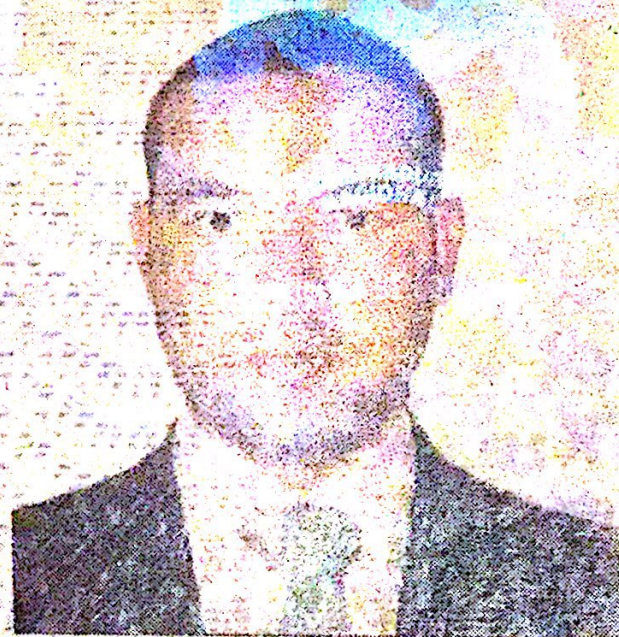
APELLIDOS

**IVAN DARIO**

NOMBRES



FIRMA







INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-SEP-1985**

**SOATA**  
**(BOYACA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

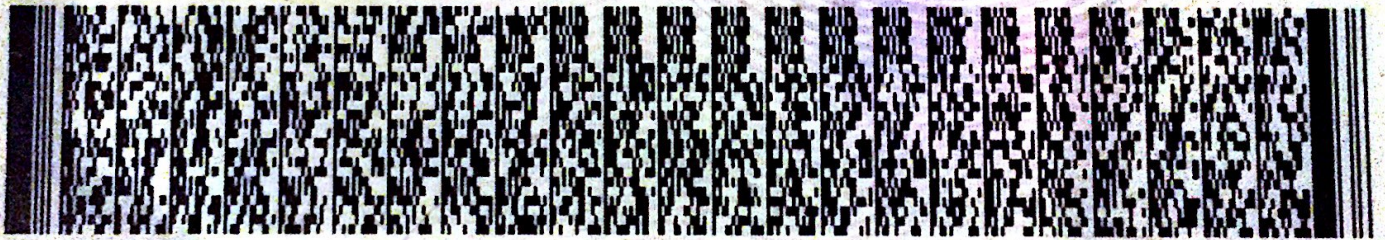
**1.71**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**25-SEP-2003 SOATA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00158263-M-0074170653-20090601

0012035245A 1

1160035318

Tunja, 20 de junio de 2025

Señores

**Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare**

L. C.

**REFERENCIA:** SOLICITUD HOMOLOGACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS - CONVOCATORIA NO.4 DE EMPLEADOS DE TRIBUNALES, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS

**IVÁN DARÍO VALBUENA ARANGO**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en causa propia, por medio del presente documento acudo a su excelentísima autoridad, haciendo uso del Derecho Fundamental a presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas, consagrado en el artículo 23 de La Constitución Política de Colombia; con el fin de solicitar se apruebe la homologación de cargo al cual me inscribí dentro del concurso de méritos de la referencia, el cual corresponde a **Profesional universitario de Tribunal, centro u oficina de servicios – grado 16**, el cual, a la fecha y luego de casi perder vigencia la lista de elegibles, aún no ha resultado con posiciones vacantes dentro de las vacantes publicadas en la página de la rama. Lo anterior, teniendo en cuenta que la situación hace que vea frustrada mis expectativas de poder acceder al ejercicio del cargo al cual me inscribí.

Para los efectos anteriores, solicito que se dé aplicación a la figura señalada en el acuerdo 1586 de 2002, modificado por el acuerdo PSAA07-4156 DE 2007, según el cual *“Los aspirantes que superaron la etapa de selección de los concursos de méritos, para proveer los cargos de Empleados de Carrera de la Rama Judicial, podrán solicitar, por única vez, la homologación de su cargo de inscripción a un cargo de igual o inferior categoría, cuando en virtud de una sentencia judicial o una decisión de la Sala Administrativa aquel haya sido suprimido, trasladado, reubicado o redistribuido, o cuando concursaron para cargos no existentes en la planta de las Corporaciones o despachos para los cuales fueron convocados...”*. En ese sentido, solicito se apruebe la homologación con el cargo de Secretario de Juzgado de Circuito.

### FUNDAMENTOS JURIDICOS

Fundamento mi petición, en el derecho constitucional fundamental que me asiste en virtud del artículo 23 de nuestra Constitución Política, así como de conformidad con la normatividad aplicable al régimen de carrera de la Rama Judicial y los reglamentos correspondientes al proceso de selección respectivo.

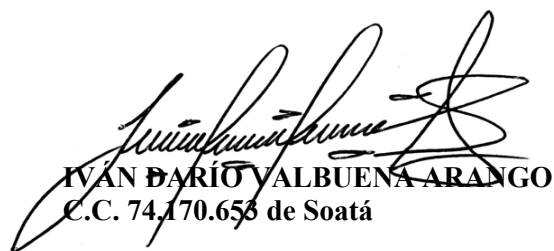
### NOTIFICACIONES

Cualquier notificación o comunicación la recibiré a través de medio electrónico a:

Dirección electrónica: ivalarang@gmail.com

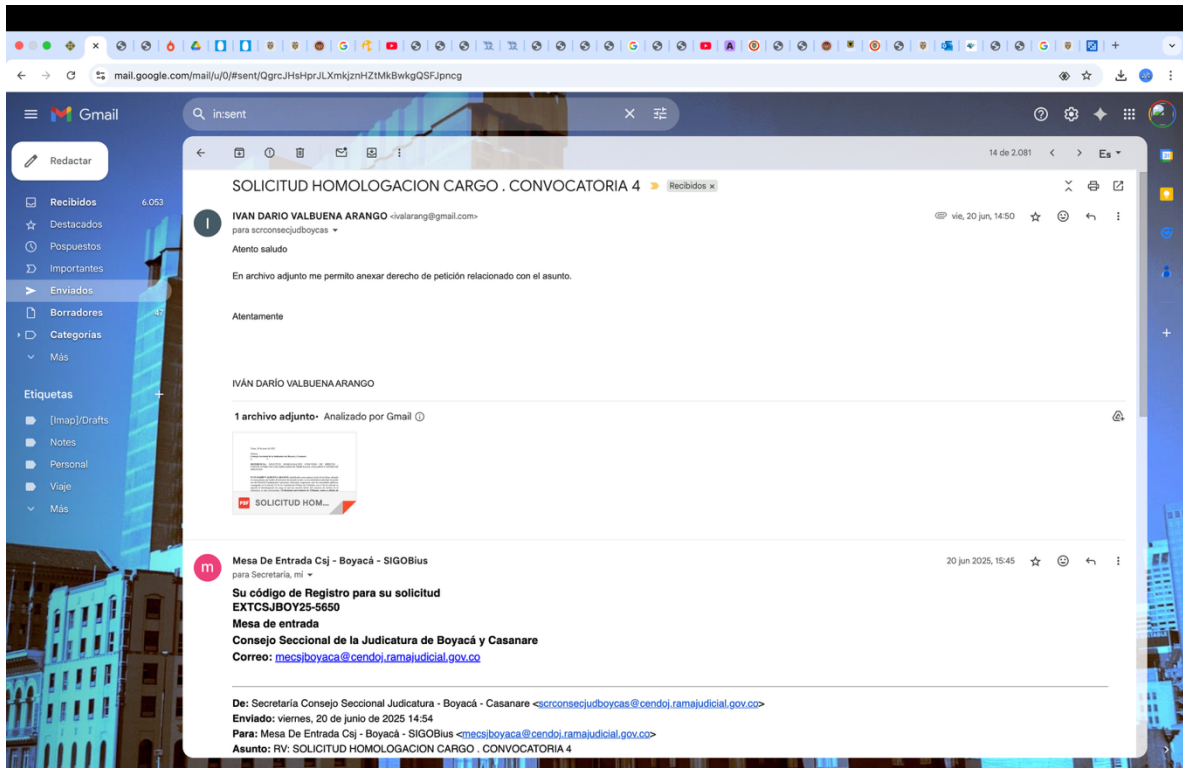
Teléfono: 317 6705626

Cordialmente,



**IVÁN DARÍO VALBUENA ARANGO**  
C.C. 74.170.653 de Soatá





SOLICITUD HOMOLOGACION CARGO . CONVOCATORIA 4

IVAN DARIO VALBUENA ARANGO <ivalarang@gmail.com>  
para sscrconsejudboyacas

vie, 20 jun, 14:50

Atento saludo

En archivo adjunto me permito anexar derecho de petición relacionado con el asunto.

Atentamente

IVAN DARIO VALBUENA ARANGO

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



Mesa De Entrada CsJ - Boyacá - SIGOBius  
para Secretaría, mi

20 jun 2025, 15:45

Su código de Registro para su solicitud  
EXTCSJB0Y25-5650

Mesa de entrada

Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare

Correo: [mecsiboyaca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:mecsiboyaca@cendoj.ramajudicial.gov.co)

De: Secretaría Consejo Seccional Judicatura - Boyacá - Casanare <[sscrconsejudboyacas@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:sscrconsejudboyacas@cendoj.ramajudicial.gov.co)>

Enviado: viernes, 20 de junio de 2025 14:54

Para: Mesa De Entrada CsJ - Boyacá - SIGOBius <[mecsiboyaca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:mecsiboyaca@cendoj.ramajudicial.gov.co)>

Asunto: RV: SOLICITUD HOMOLOGACION CARGO . CONVOCATORIA 4